

Santiago de Cali, diciembre del 2024

Señores

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO -REPARTO

Ciudad

Referencia: Medio de control- Reparación Directa

Demandante: Luis Gonzaga Marín Pineda

Demandado: Distrito de Santiago de Cali

Correo e. notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Correo e. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
noralba.garcia@cali.gov.co
contactenos@cali.gov.co

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA: La legitimación por activa; El señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** como víctima directa y **CLARA RIOS ARDILA** como víctima indirecta, en calidad de esposa del señor Marín Pineda, con ocasión al accidente de tránsito ocurrido a los tres (03) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), cuando el señor Pineda se movilizaba en calidad de peatón a la altura de la calle 44 con avenida 6 norte en donde la **Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios** dependencia de la **Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali**, se encontraba desarrollando un contrato de obra pública de mantenimiento y adecuación del paisajismo y obras complementarias de las zonas verdes; espacio en donde la entidad encargada instaló una separación con material de polisombra de manera deficiente, lo que ocasionó que este elemento de seguridad, se cayera obstruyendo la totalidad del paso peatonal generando el hecho desencadenante de la acción del peaton, por este motivo el peatón lesionado se vio obligado a bajar del andén o acera mientras pasaba el espacio ocupado por la entidad demandada lo que desencadenó que fuera arrollado por un bus padrón del **sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO)**, perteneciente a la entidad **ETM Empresa de Transporte**.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA: Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, en donde este último se encontraba desarrollando un contrato de obra pública de mantenimiento y adecuación del paisajismo y obras complementarias de las zonas verdes y omite el deber ser de realizar una correcta instalación que determine claramente los pasos peatonales, por el contrario la polisombra que utilizaron para garantizar el paso, al

encontrarse mal instalada se cae sobre el tramo designado para los peatones ocasionado que el lesionado descendiera del andén porque no contaba por donde pasar, igualmente no se evidencia señalización indicando el desarrollo de la obra adelantada.

JOSE JULIAN ARANGO ESCOBAR identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.258.847 de Tuluá y portador de la tarjeta profesional de Abogado No. 352.270 proveída por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, **MARIA JENIFER GIRALDO GIRALDO** identificada como cédula de ciudadanía No. 1.007.304.272 de Cali, portadora de la tarjeta profesional de abogada No. 407.289 proveída por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderados judiciales del señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** y **CLARA RIOS ARDILA**, actuando a nombre propio y de acuerdo al poder otorgado, acudimos a esa Honorable Corporación para impetrar medio de control - **demanda de Reparación Directa** en contra del **Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios**, para que por los medios previstos en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, con citación y audiencia de la parte demandada y del agente del Ministerio Público, se declare su responsabilidad patrimonial de los perjuicios causados a la parte demandante por la omisión de señalización y por la mala instalación de los elementos de seguridad que se utilizaron para delimitar el paso peatonal, los cuales se encontraban caídos obstaculizando la zona determinada para peatones esto por parte de la **Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios** cuando se encontraba desarrollando un contrato de obra pública de mantenimiento y adecuación del paisajismo y obras complementarias de las zonas verdes; espacio en donde la entidad encargada instaló mal la polisombra que se encarga de separar la zona peatonal, lo que generó la caída de la misma y la obstrucción del área delimitada impidiendo el paso peatonal, ni dejó la demarcación requerida para indicar el desarrollo de la obra adelantada, por este motivo el peatón lesionado se vio obligado a bajar del andén o acera mientras pasaba el espacio ocupado por la entidad demandada lo que desencadenó que un bus padrón del **sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO)**, perteneciente a la entidad **ETM Empresa de Transporte**, con placa **VCQ874**, de marca Mercedes Benz, conducido por el señor **LUIS ALFREDO DAGUA SEVILLA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 80.413.339, lo colisionara, resultando gravemente lesionado, posterior al suceso fue trasladado por medio de ambulancia hasta la **IPS Valle Salud Norte**.

LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

1. **PARTE DEMANDANTE:** Está compuesta por las siguientes personas:

LUIS GONZAGA MARIN PINEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 14.951.794 de Cali Valle (Víctima)

CLARA RIOS ARDILA identificada con cédula de ciudadanía No. 31.919.495 de Cali Valle (Esposa de la víctima)

Apoderados de la parte demandante

JOSÉ JULIÁN ARANGO ESCOBAR identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.258.847 de Tuluá y portador de la tarjeta profesional de Abogado No. 352.270 del Consejo Superior de la Judicatura.

MARIA JENIFER GIRALDO GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.007.304.272 de Cali y portadora de la tarjeta profesional de abogada No. 407.289 del Consejo Superior de la Judicatura.

2. **PARTE DEMANDADA:** Está compuesta por:

Corresponde al Distrito Especial de Santiago de Cali y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

PRETENSIONES

PRIMERA. Que se declare patrimonialmente responsable al **Distrito Especial De Santiago De Cali, Unidad Administrativa Especial De Gestión De Bienes Y Servicios**, Por todos los perjuicios ocasionados a **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** y a la señora **CLARA RIOS ARDILA**, a raíz de las lesiones físicas, perturbaciones económicas y psicológicas sufridas por el señor **Marín Pineda**, derivadas del siniestro que presento a los tres (03) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022) cuando se movilizaba en calidad de peatón a la altura de la calle 44 con avenida 6 norte, a las 18:40 horas, en el distrito especial de Santiago de Cali, punto geográfico en donde la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**, se encontraba desarrollando un contrato de obra pública de mantenimiento y adecuación del paisajismo y obras complementarias de las zonas verdes; espacio en donde la entidad encargada no estableció pasos peatonales, ni dejó la demarcación requerida para indicar el desarrollo de la obra adelantada, por este motivo el peatón lesionado se vio obligado a bajar del andén o acera mientras

pasaba el espacio ocupado por la entidad vinculada lo que desencadenó que un bus padrón del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO), perteneciente a la entidad **ETM Empresa de Transporte**, con placa **VCQ874**, de marca Mercedes Benz, conducido por el señor **LUIS ALFREDO DAGUA SEVILLA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 80.413.339, lo colisionara, resultando gravemente lesionado, posterior al suceso fue trasladado por medio de ambulancia hasta la **IPS Valle Salud norte**, en donde es atendido con diagnóstico de ingreso "Trauma a nivel de cráneo, hombro, antebrazo, muñeca, mano y rodilla del lado derecho con posterior dolor y limitación funcional secundaria" y diagnóstico de egreso, fractura expuesta grado II en radio derecho, con reducción abierta más osteosíntesis de fractura distal muñeca derecha, posterior a esto fue valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde determinaron Incapacidad médico legal **DEFINITIVA** de setenta y cinco (75) días, secuelas médico legales: Perturbación funcional de miembro superior derecho de carácter transitorio; perturbación funcional de órgano sistema de la prensión (mano derecha) de carácter transitorio.

SEGUNDA. Que, como consecuencia obligada de la anterior declaración, se condene a las entidades demandadas a pagar las siguientes sumas de dinero:

PERJUICIOS MATERIALES

1. Lucro cesante:

El fundamento relacionado con el presente proceso se encuentra en la pérdida de capacidad laboral del señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA**, como consecuencia de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas causadas en el suceso que da origen a esta reclamación, para la liquidación de este perjuicio se tendrán en cuenta los siguientes parámetros.

- ❖ El porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que podrá estar oscilando en un veinte por ciento (20%), según las características de las afectaciones físicas, psicológicas/psiquiátricas sufridas por el señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA**.
- ❖ Los ingresos promedio mensuales, es decir para los efectos, el salario mínimo mensual vigente para la época en que ocurrió el siniestro, en octubre del año dos mil veintidós (2022)
- ❖ El periodo de vida probable del afectado en el siniestro, con diez coma cuarenta y ocho (10,48) años de expectativa de vida laboral, esto teniendo en

cuenta el documento de proyecciones de población expedido por el departamento nacional de estadísticas.

- ❖ Los intereses compensatorios desde la fecha de su causación hasta cuando se produzca la indemnización.

La suma arrojada será actualizada, conforme la siguiente fórmula:

$$Ra = R \times \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}}$$

Donde los factores equivalen a:


- Ra Renta actualizada que se busca
- R La renta o ingreso a actualizar para la fecha de los hechos
- Índice final Índice de precios al consumidor a la fecha del incidente
- regulador índice inicial- índice de precios al consumidor a la fecha de causación del perjuicio.

La indemnización comprenderá dos períodos:

- a. **Vencido o consolidado**, que se establezca aplicando la fórmula:

$$Rc = \frac{Ra (1+i)^n - 1}{i}$$

- Rc Lucro cesante consolidado
- Ra ingreso base de liquidación
- i Interés puro o técnico del 6 % mensual o 0. 004867 mensual
- n Período (número de meses) que comprende la indemnización, que va desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta aquella probable de ejecutoria del auto.

		CALCULO DE INDEMNIZACIÓN DE VIDA HISTORICA VENCIDO O CONSOLIDADO		
S	Suma a obtener	6.311.329		FORMULA
RA	Renta actualizada	\$ 260.000		$S = \frac{RA (1 + I)^n - 1}{I}$
I	Tasa mensual de interes puro o legal - es decir 0,004867	0,004867	TOTAL MESES	
N	Numero de meses transcurridos desde el momento de los hechos	13/10/2022	20/9/2024 23	
1	Constante = Resultado final			
TOTAL INDEMNIZACIÓN DE VIDA CONSOLIDADO		\$	6.311.329	

- b. **Futuro o anticipado**, que se halla mediante la fórmula:

$$R_f = \frac{R_a (1+i)^n - 1}{i (1+i)^n}$$

- R_f

Lucro cesante futuro
- R_a

Ingreso base de liquidación
- i

interés puro
- N

número de meses a liquidar

De acuerdo con los factores mencionados y contando que el señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** nació el 15 de agosto del 1948, de manera que para la fecha de las lesiones contaba con 74 años de edad, por ende, tiene un periodo de vida probable de 10.48 años equivalentes a 125,76 meses

		CALCULO DE LA INDEMNIZACIÓN FUTURA		
S	Suma a obtener	20984505,47		
RA	Renta actualizada	\$ 260.000		
I	Tasa mensual de interes puro o legal - es decir 0,004867	0,004867	TOTAL DE MESES	
N	Numero de meses transcurridos desde el momento de los hechos	10/13/2022	9/20/2024	23
1	Constante = Resultado final			
Edad a la fecha del siniestro	74	Periodo de vida probable según resolución 0497 de 1997	10,48	TOTAL CALCULO DE INDEMNIZACIÓN FUTURA \$ 20.984.505
Equivalente en meses del periodo de vida	125,76	Este valor surge del valor del periodo de vida probable multiplicado por la cantidad de meses del año es decir 12		
Se descuenta el numero de meses liquidados en el periodo a consolidar	103			
VALOR TOTAL INDEMNIZACIÓN DE VIDA CONSOLIDADO E INDEMNIZACION FUTURA		\$ 27.295.834		

Los perjuicios

Podría tasarse aproximadamente este perjuicio en la suma de **veintisiete millones doscientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos (\$27.295.834)**

II. PERJUICIOS INMATERIALES

1. Perjuicios Morales

La tradicional concepción del daño moral se centra en el daño ocasionado al ámbito afectivo o sentimental de la persona, lo que trae como consecuencia, sufrimiento, dolor, perturbación espiritual, situaciones, que como se demostrará; se evidenciaron tanto en el afectado, como en su compañera permanente.

Atendiendo los principios de Reparación Integral y Equidad que señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y la sentencia del Consejo de Estado **Sección Tercera, Sentencia 27001233100020090017701 (41517), Sep. 17/18**. La valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, por lo cual se tarará así:

Consejo de estado, sección tercera, sentencia 27001233100020090017701 (41517), Sep. 17/18.

Es preciso mencionar que se realiza la tasación de perjuicios morales asumiendo que la pérdida de capacidad del señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** sea de un veinte por ciento (20%) o lo que resulte probado.

- **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes S.M.L.M.V. al momento de la ejecutoria de la providencia que apruebe el acuerdo. Que para la fecha corresponde a **Cincuenta y dos Millones de pesos (52.000.000)**
- **CLARA RIOS ARDILA** cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes S.M.L.M.V. al momento de la ejecutoria de la providencia que apruebe el acuerdo. **Cincuenta y dos Millones de pesos (52.000.000)**

Daño a la salud o fisiología

En relación al perjuicio fisiológico, hoy denominado daño a la salud , derivado de las lesiones a la integridad psicofísica de las víctimas directas, el Honorable Consejo de Estado unificó la jurisprudencia, reiterando la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222 ambas del 14 de septiembre del 2011, en el mismo sentido de que la regla general en materia indemnizatoria por este concepto es de 10 a 100 SMLMV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMLMV, siempre que esté debidamente motivado, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida. Así se plasmó en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Ex 28832 C.P Danilo Rojas. Actos. Andrea Erich Sholen: Demandado Ministerio de Justicia y Derecho Instituto Nacional Penitenciario.

Entonces, como se aprecia, **el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto**, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, **sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial**. En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, **cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones**.

En ese orden de ideas, insistió

El concepto **de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos**, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.” (Resaltado fuera de texto original).

Bajo las consideraciones de las graves lesiones sufridas por el señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA**, a causa del accidente que sufrió al ser colisionado por un bus patrón del Sistema Masivo Integrado de Occidente MIO, debido a que la entidad **Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios**, quienes se encontraban adelantando obras en el sector donde ocurrió el siniestro, no previo el paso peatonal ni la señalización que debe estar presente en cualquier obra pública con el objetivo de proteger la vida de los transeúntes, accionar que obligó al señor **MARIN PINEDA** a descender de la acera o andén desencadenando el atropello generando un desmedro en su salud que produjo afectaciones psico-físicas que deberán ser reparadas por las demandadas, teniendo en cuenta lo señalado por el Instituto de Medicina Legal Y ciencias Forenses que determinó (Perturbación funcional de miembro superior derecho de carácter transitorio; perturbación funcional de órgano sistema de la prensión (mano derecha) de carácter transitorio) como también el hecho que lo perjudicó indefectiblemente y en general la zozobra producto del accidente de tránsito que afectó sus actividades rutinarias como el miedo que actualmente le genera movilizarse en la calle.

La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión que apruebe el acuerdo.

Daño del derecho a la recreación, al aprovechamiento del tiempo libre, como daño a otro derecho Constitucional

El objetivo de la reparación es fundamentalmente devolver las cosas a su estado primitivo, *in natura*; no obstante, hay eventos que por su naturaleza impiden lograr ese tipo de reparación, de allí que surjan las indemnizaciones y las compensaciones como forma reparatoria. No obstante, la reparación no puede traducirse en un beneficio para el perjudicado, es decir no puede ir más allá, o de percibir más de lo que perdiere como consecuencia del daño.

Si bien es cierto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha realizado serios estudios que permitan estructurar una tipología adecuada de los daños inmateriales, construida sobre la base de los principios de reparación integral y el "no enriquecimiento sin causa", no ha sido del todo pacífica la discusión, aún más cuando el escenario ofrece un alto grado en la polémica pues la doctrina refiere multiplicidad de daños inmateriales; la evidente dualidad de conceptos en lo que atañe a la finalidad de la reparación, es decir si se indemniza el daño evento o la consecuencia del mismo. Sin embargo, encontramos que en el mismo sentido nuestro Consejo de Estado advierte, a pesar de categorizar los daños inmateriales en clases que no llamen a confusiones, el daño moral y daño a la salud; la viabilidad de encontrar otros daños inmateriales, atendiendo el interés y el derecho permeado por el evento antijurídico, aunque permitiéndose únicamente en asuntos diferentes a las reclamaciones por lesiones psicofísicas. sostuvo:

*Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) **cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de "daño corporal o afectación a la integridad psicofísica" y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros)**, siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación//*

Sin embargo, debemos comprender que el daño a la salud, no obstante, envuelve el daño- evento y el daño-consecuencia, su capacidad reparatoria no abarca el menoscabo de otro tipo de intereses y derechos amenazados o quebrantados, que no hacen parte de la consecuencia de la lesión psico-física.

Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia, ha sostenido:

//Desde esta perspectiva, y en contraposición al daño estrictamente patrimonial, el perjuicio extramatrimonial no se reduce al tradicional menoscabo moral, pues dentro del conjunto de bienes e intereses jurídicos no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos aquéllos distintos a la aflicción, el dolor, el sufrimiento o la tristeza que padece la víctima. En este contexto, son especies de perjuicio no patrimonial –además del daño moral– el daño a la salud, a la vida de relación, o a bienes jurídicos de especial protección constitucional tales como la libertad, la dignidad, la honra y el buen nombre, que tienen el rango de derechos humanos fundamentales.

Así fue reconocido por esta Sala en providencia reciente, en la que se dijo que ostentan naturaleza no patrimonial: “...la vida de relación, la integridad sicosomática, los bienes de la personalidad –verbi gratia, integridad física o mental, libertad, nombre, dignidad, intimidad, honor, imagen, reputación, fama, etc.–, o a la esfera sentimental y afectiva...” (Sentencia de casación de 18 de septiembre de 2009) [Se subraya]

Estas subespecies del daño extrapatrimonial no pueden confundirse entre sí, pues cada una de ellas posee su propia fisonomía y peculiaridades que las distinguen de las demás y las hacen merecedoras de tutela jurídica; aunque a menudo suele acontecer que confluyen en un mismo daño por obra de un único hecho lesivo.

Discurrió la misma Corporación en este sentido:

*//De ahí que **el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras**, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como **vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional.***

Las dos primeras formas de perjuicio han sido amplia y suficientemente desarrolladas por esta Corte. El menoscabo a los bienes jurídicos personalísimos de relevancia constitucional, en cambio, aunque se ha enunciado tangencialmente por la jurisprudencia, no ha sido materia de profundización, dado que hasta ahora no se había planteado ese asunto en sede de casación.

Y es que esta nueva concepción, como lo sostiene la alta Corporación de la jurisdicción ordinaria, obedece a que “el constitucionalismo se convirtió de ese modo en el nuevo paradigma del orden jurídico, cuyo influjo ha repercutido en las demás áreas del derecho positivo, incluido el derecho civil, naturalmente, que además de la función que tradicionalmente ha cumplido como regulador de las

relaciones privadas, asume ahora un carácter protector de los derechos inalienables.

(...) La atención debe centrarse, entonces, no en la posibilidad de admitir la indemnización del daño a los bienes personalísimos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales que reconocen derechos fundamentales, como categoría autónoma perteneciente al género de los perjuicios extrapatrimoniales –pues su existencia hoy en día no se pone en duda–; sino en precisar en qué casos resulta viable su concesión, con el fin de evitar un pago doble o exagerado de una misma consecuencia nociva que tiene su causa adecuada en un único evento.

De manera que, por regla general, el desagravio del perjuicio no patrimonial carece de la virtualidad de producir un enriquecimiento injusto, pues los bienes jurídicos inherentes a la persona humana no tienen equivalencia en dinero. Luego, si la medida de satisfacción que se reconoce no lleva implícito un provecho económico sino más bien de simple consolación, satisfacción o compensación, entonces es desacertado afirmar que la misma puede dar lugar a cualquier tipo de lucro (...).

Así pues en aras de satisfacer cada interés legítimo lesionado con el hecho dañoso, en el caso de autos, tenemos que además de apelar sus derechos fundamentales a la vida, el respeto por la integridad física, se generó el menoscabo de un interés diferente que no es resarcido con el reconocimiento del daño a la salud, pues además de afectar la integridad física, el menoscabo de otros derechos constitucionales, se han visto sacudidos, como consecuencia de la afectación, así sus actividades cotidianas, deportivas, recreacionales, resultaron frustradas por la incapacidad física arrojada. De tal suerte que el disfrute a plenitud de su vida, la recreación, como un derecho fundamental, se han visto seriamente afectados con la situación ocurrida.

Recordemos que el contenido del artículo 52 constitucional, del derecho al deporte a la recreación y la educación física, plantea en su núcleo esencial la función a nivel individual, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y, a nivel social, el desarrollo social del país a través de su función socializadora, integradora y pacificadora.

La consagración del deporte como derecho tuvo como referente internacional el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consideró al deporte como un derecho social. En 1978, la Carta Internacional de Educación Física y Deporte, adoptada por la UNESCO ratificó en el mundo no sólo la importancia que tiene el deporte, sino también la educación física y la recreación como elementos esenciales dentro del sistema de educación, formación integral de las personas y enriquecimiento de la cultura.

Sin duda alguna la aniquilación de algunas tareas recreacionales para **EL AFECTADO LUIS GONZAGA MARIN PINEDA**, como el desarrollado de tareas deportivas y/o culturales desencadenaron un desarrollo anormal de su vida que debe ser reparado, por la conculcación de su derecho constitucional a la recreación, al despliegue de actividades lúdicas, de la capacidad para su realización, que como consecuencia del daño sufrido se generaron.

La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión que apruebe el acuerdo, y a favor del lesionado.

OTRAS MEDIDAS REPARATORIAS

La jurisprudencia de la alta corporación de lo contencioso administrativo ha expuesto la necesidad de reparar integralmente a la víctima del daño causado por las entidades públicas, que obedece no sólo a la materialización del principio de "reparación integral" que nuestro ordenamiento ha incorporado, sino en respuesta a la influencia de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias al denominado "Bloque de constitucionalidad".

En virtud de la figura los jueces están sujetos a tener presente los instrumentos internacionales que se incorporan en nuestro compendio normativo, tal como puede interpretarse del contenido del artículo 93 constitucional. De allí que la jurisprudencia de los intérpretes autorizados de los instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad resulta efectiva al momento de interpretar el alcance de los derechos humanos y del propio Derecho internacional humanitario, y las maneras de

su reparación. Precisamente el órgano judicial internacional ha trazado parámetros que nos muestra que la reparación a la víctima trasciende más allá de la obligación de dar, de lo pecuniario, para obligar al causante a hacer, como una forma de reparar integralmente el perjuicio causado.

Respecto a la procedencia de este tipo de medidas correctivas, el H. Consejo de Estado sostuvo:

Como se precisó, el daño antijurídico considerado como lesión de un derecho, bien o interés legítimo supone la alteración o afectación de un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfera interna y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no sólo comprende la órbita patrimonial. Así las cosas, el principal objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la demanda -o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio por el juez- tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior a su producción. Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos negativos que el mismo desencadena. No obstante, si lo anterior deviene imposible en términos materiales, resulta imprescindible establecer cuál es la magnitud del daño antijurídico y qué medidas de reparación pueden ser decretadas para resarcir las consecuencias de aquél, como por ejemplo la indemnización por equivalente. Así las cosas, la reparación no se asimila a indemnización, ya que esta última constituye uno de los varios componentes que integran a la primera y, por ende, la relación que existe entre uno y otro concepto es de género y especie, motivo por el cual el daño antijurídico desde el paradigma actual de la reparación desborda el que impone el concepto de patrimonio. Los anteriores lineamientos se acompasan con las posturas y tendencias modernas de la responsabilidad que desbordan el concepto de "responsabilidad patrimonial", para adoptar la categoría de "derecho de daños", en el que el eje central lo constituye la persona que padece la afectación y, por consiguiente, la principal función de la responsabilidad en el mundo moderno consiste no tanto en sancionar conductas como en restablecer los derechos, bienes o intereses legítimos que se afectan con la producción de un daño. En ese orden de ideas, la Sala ante la gravedad de los hechos en el caso sub examine, adoptará una serie de medidas y determinaciones que apuntan a reparar de manera integral el daño irrogado a los demandantes, constituido aquél no sólo por los perjuicios materiales e inmateriales que tienen repercusión patrimonial y que fueron determinados en los acápites anteriores, sino, adicionalmente, por las graves y significativas vulneraciones a los derechos humanos -fundamentales- de los demandantes.

TERCERA. Que el valor de la indemnización acordada se liquide con la acusación de los intereses desde la fecha del reconocimiento hasta el momento efectivo del pago de la suma conciliada.

HECHOS

PRIMERO: El núcleo familiar del señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA**, lesionado en el accidente de tránsito está compuesto por su compañera permanente la señora **CLARA RIOS ARDILA** identificada con cédula de ciudadanía Nro. 31.919.495 de Cali

quienes se tiene gran respeto, afecto y amor entre ellos, por lo que se vio afectada notablemente por el estado de salud del señor **MARÍN PINEDA** a causa del accidente de tránsito, asimismo fue la persona que hizo el acompañamiento para la recuperación de nuestro representado.

SEGUNDO: Para el año de ocurrencia de los hechos el señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** laboraba como independiente lo que generaba que sus salarios oscilarán cada mes por este motivo se determinará como salario del lesionado un salario mínimo para la fecha del siniestro correspondiente a un millón de pesos (\$1.000.000)

TERCERO: El tres (03) de octubre del año dos mil veintidós (2022) a la altura de la calle cuarenta y cuatro (44) norte con avenida sexta norte, en el distrito especial de Santiago de Cali, punto geográfico en donde la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**, se encontraba desarrollando un contrato de obra pública de mantenimiento y adecuación del paisajismo y obras complementarias de las zonas verdes; espacio en donde la entidad encargada instaló de manera inadecuada la polisombra que se encargaba de delimitar el paso peatonal, lo que ocasionó la caída de la misma obstruyendo el área por donde debían transitar los peatones, ni dejó la demarcación requerida para indicar el desarrollo de la obra adelantada, por este motivo el peatón se vio **obligado** a bajar del andén mientras pasaba el espacio ocupado por la entidad vinculada lo que desencadenó que un bus padrón del **sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO)**, perteneciente a la empresa **ETM Empresa de Transporte**, con placa VCQ874, de marca Mercedes Benz, conducido por el señor **LUIS ALFREDO DAGUA SEVILLA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 80.413.339, lo atropellara, resultando gravemente lesionado, posterior al suceso fue traslado por medio de ambulancia hasta la IPS Valle Salud norte donde le fue prestado el servicio médico.

CUARTO: Posterior a efectuar oficios tendientes a solicitar información a la alcaldía del distrito especial de Santiago de Cali, por respuesta emitida por esta entidad con radicado 202341810100020321 el cual se aporta en la presente demanda, se logró determinar que para la fecha del siniestro, en la dirección establecida como Calle 44 Con avenida 6ta Norte, de la ciudad de Cali, se encontraban adelantando obras correspondientes con el mantenimiento y adecuación del paisajismo y obras complementarias de las zonas verdes a cargo de la entidad **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**.

QUINTO: El siniestro ocasionó graves afectaciones a la salud del señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** quien posterior al suceso ingreso a la clínica Valle salud Norte, en donde es atendido con diagnóstico de ingreso "Trauma a nivel de cráneo, hombro, antebrazo, muñeca, mano y rodilla del lado derecho con posterior dolor y limitación funcional secundaria" y diagnóstico de egreso, fractura expuesta grado II en radio derecho, con reducción abierta más osteosíntesis de fractura distal muñeca derecha, a la fecha todavía se encuentra en el proceso médico ya que no ha logrado recuperar la totalidad del miembro afectado.

SEXTO: Desde el accidente el señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** ha estado involucrado en constantes tratamientos clínicos para superar sus dolencias, que han permeado notablemente su capacidad física que se ha visto reflejado en el impedimento para el desarrollo normal de su actividad económica, de la que estuvo alejado por varios meses, sùmese a la evidente pérdida de su capacidad física para el desenvolvimiento de sus funciones laborales que sin duda alguna repercutieron en su productividad.

SÉPTIMO: El proceso generado por las lesiones causadas a raíz del accidente ocasionado por la falla de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**, ocasionó múltiples afectaciones no solo al señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA**, como lesionado directo del suceso, sino a su núcleo familiar que se vio en la tarea de cuidarlo, apoyarlo y acompañarlo en el proceso médico y de recuperación.

OCTAVO: El proceso vivido por el señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA**, derivado del siniestro ha desencadenado en él una serie de afectaciones que van más allá de su parte física, adicional a esto su parte psicológica y social se ha visto permeada y disminuida debido a que posterior a lo vivido presenta miedos y dificultades para movilizarse solo en la calle, lo que le genera dependencia de algunos miembros de su grupo familiar para salir de la casa a cumplir con sus funciones o a realizar trámites personales, asistir a citas médicas o a realizar actividades lúdicas o recreativas al aire libre con su entorno familiar, secuelas que toda la familia del lesionado han tenido que padecer y en las cuales lo han acompañado y apoyado buscando una mejoría.

NOVENO: El señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** fue valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde determinaron Incapacidad médico

legal **DEFINITIVA** de setenta y cinco (75) días, secuelas médico legales: Perturbación funcional de miembro superior derecho de carácter transitorio; perturbación funcional de órgano sistema de la prensión (mano derecha) de carácter transitorio.

DÉCIMO: El día de ocurrencia del siniestro el lesionado tomó fotografías del estado de la vía, donde se puede corroborar que se encontraban haciendo obras de mantenimiento en la zona peatonal, que se había realizado una separación por medio de polisombra de color verde, para permitir el paso de peatones por la calle, pero que derivado de la mala ejecución de la obra dicho elemento se había caído y se encontraba tirado en el piso que causó que el señor **LUIS GONZAGA MARIN**, no contara con un espacio adecuado para transitar, ocasionando el atropello.

DÉCIMO PRIMERO: Debido al accidente sufrido por el señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA**, derivado del atropellamiento causado por un bus de servicio público, se procedió a interponer denuncia ante la fiscalía general de la nación, por medio de Querrela a la cual le fue asignado el radicado 760016099165202284584.

DÉCIMO SEGUNDO: La fiscalía asignada para adelantar el proceso investigativo teniendo en cuenta la comisión del delito estipulado como lesiones culposas, artículo 120 C.P. fue la **FISCALÍA 94 LOCAL**, Fiscal **CLAUDIA MAIDOLE VALENCIA PRIETO**

DÉCIMO TERCERO: Por medio de oficio emitido por la **FISCALÍA 94 - LOCAL**, de Cali, se solicitan labores investigativas encaminadas a confirmar las características del lugar de los hechos y buscar posibles testigos en el lugar, actividad asignada al investigador **FERNANDO GARZON ROJAS**.

DÉCIMO CUARTO: En el siniestro hubo presencia de agentes de tránsito quienes se encargaron de realizar todo el procedimiento establecido, el cual fue consignado en el informe IPAT A001523473, realizado por el agente de tránsito **JOHNNY LEDEZMA CHAMORRO**, identificado con número de placa 248.

DÉCIMO QUINTO: En el informe realizado por la autoridad de tránsito y plasmado en el documento IPAT con número consecutivo A001523473, se deja plasmada como hipótesis del caso lo siguiente: *"Transitar por la calzada y sin acompañante (aplica*

para el peatón) y no estar pendiente de la vía y de las acciones de los demás (aplica para el conductor)"

DÉCIMO SEXTO: En el Acta de inspección a lugares FPJ 09 realizado por el agente de tránsito Johnny Ledesma Chavarro- adscrito a la Secretaría de Movilidad refiere en cuanto a la inspección del lugar de los hechos:

Área Urbana, sector comercial, diseño intersección vehicular, condición climática normal.

Calle 44: Vía curva, plana, con andenes en construcción de un sentido sur- norte con una calzada de 2 carriles en asfalto bueno y seco, con buena iluminación artificial, con semáforos operan, carente de señales de tránsito reglamentarias, con señal vertical transitoria de peatones y demarcación vial de línea de pare, zona peatonal y flechas. Se observan bombonas y tela de cerramiento derribadas en zona blanca y separador sardinel y carril derecho, también senderos peatonales en construcción y mantenimiento.

ABOGADOS & ASOCIADOS

DÉCIMO SÉPTIMO: En el informe adelantado en el formato FPJ-11, el investigador encargado deja consignado lo siguiente: "Teniendo en cuenta que se dispone de un informe policial de accidente de tránsito con la descripción del lugar de los hechos, bosquejo topográfico con sus respectivas medidas conforme a la resolución 11268 de 2012 y de los restantes formatos de policía judicial se identifica el lugar plenamente dentro de la jurisdicción del Distrito de Cali, se realiza labor de campo en la zona de influencia del accidente Calle 44 Avenida 6 norte sobre calle 44 sentido al sur donde se presentó el accidente, al análisis de la labor de campo y vecindario se puede determinar que para la fecha del siniestro, la zona blanda se encontraba en reparación, lo anterior quedó plasmado en el IPAT # A001523473."

DÉCIMO OCTAVO: A la fecha el lesionado no ha terminado su proceso médico y de recuperación teniendo en cuenta las graves lesiones que presentó derivado de la responsabilidad de la entidad **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**, quienes mientras realizaban reparaciones y embellecimiento a la infraestructura de la ciudad de Cali, dejaron cerrado el camino peatonal, obligando de esta forma al señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** a bajarse del andén lo que ocasionó el atropello del peatón por parte de un bus de servicio público del MÍO - empresa ETM.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Constitución política de Colombia, artículos 1, 2, 6, 90, 93, 217, 318 y 365.

Artículo 2:

Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado.

En su artículo 90, reza:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas

Convención Americana de Derechos Humanos

artículos 1, 11, 22.

Sostiene en su artículo 1,

Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

1. Para los efectos de esta Convención, una persona es todo ser humano.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1.Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

(...)”

Por su parte en el artículo 5 se destaca el Derecho a la Integridad Personal

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

La Ley 446 de 1998,

El Artículo 16 de la ley anteriormente citada profesa:

"Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales."

FUNDAMENTOS DE LA RECLAMACIÓN

1. Fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial de la administración pública

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar que:

"las autoridades de la República están instituidas - para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"

El artículo 90 de nuestra Constitución señala que *"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas"*. La última parte de este inciso hace relación a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas.

La constitución política de Colombia, en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge cuando se ha causado un **daño antijurídico** que le sea **imputable**.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de **justicia, equidad, solidaridad**, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien

sufre el daño. Es así, cómo puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los *daños antijurídicos*.

El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad. El concepto de daño antijurídico no ha sido definido en nuestra legislación, pero hace varios años la jurisprudencia colombiana ha venido formando la teoría de la Lesión resarcible fundamentada en el daño antijurídico, basados en la doctrina española, y es así como en distintos fallos emitidos por el Consejo de Estado se encuentra una concepción del daño antijurídico que lo consagra como el fundamento de todo deber y obligación de reparación.

De ahí, que el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública. Se ha pasado de la llamada antijuridicidad subjetiva, que exigía el dolo, la culpa o falta del funcionario de la administración para generar la responsabilidad del Estado, a la llamada antijuridicidad objetiva, **que tiene como fundamento el daño ocasionado a la víctima, que pasa a ser el elemento más importante de la responsabilidad patrimonial estatal.**

1. Régimen de la falla del servicio para derivar la responsabilidad de la entidad pública

Ahora debemos precisar los aspectos que nos llevan indefectiblemente a responsabilizar a la entidad pública de los perjuicios originados a los reclamantes, pues como se logrará demostrar en el devenir del proceso, esto es atribuible a la falla de la administración pública, en quien concurren los elementos constitutivos del régimen de falta como generadora del deber resarcitorio a cargo de ella. Para ello resulta indispensable que tengamos en cuenta lo que jurisprudencialmente se han destacado como los requisitos para la constitución de la falla administrativa:

Cuando el Estado, en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada "FALTA O FALLA DEL SERVICIO", o mejor aún falta o falla de la administración, trátase de simples actuaciones, omisiones hechos y operaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y se requiere: a) Una falta o fallas del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano; c) Un daño, que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc., y d) Una relación causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización..."

Para efectos de hacer claridad de la responsabilidad que pudiere recaer sobre la entidad demandada es necesario referirse a los elementos estructurales que conllevan a la afirmación que el incidente tuvo una causa directa y eficiente: derivada de la negligencia del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**, teniendo en cuenta que se encontraba desarrollando un contrato de obra pública de mantenimiento y adecuación del paisajismo y obras complementarias de las zonas verdes; dejando la acera o el andén por donde se movilizan los peatones sin ningún tipo de espacio para que estos continúen su trayecto de forma segura, adicional a esto no realizaron la demarcación o señalización reglamentaria con el objetivo de proteger la vida de los ciudadanos razones por las cuales el señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** se vio obligado a descender a la calle lo que desencadenó el atropello del vehículo de transporte masivo MIO, En el caso que nos ocupa, con las pruebas aportadas resultara evidente la falla de la entidad acusada, pues procederemos a demostrar lo siguiente:

1. El hecho irregular.

Es sabido que corresponde a la administración municipal el debido mantenimiento de la vía pública y que adicional es responsabilidad de la misma cumplir con todas las regulaciones establecidas buscando y garantizando el bienestar de los ciudadanos, la negligencia de la administración al adelantar estas obras sin las garantías de seguridad requeridas desencadenó el siniestro donde se vio afectado el lesionado.

La seguridad de los usuarios de las vías públicas, es uno de los considerados deberes propios de las administraciones públicas, dentro de las finalidades que se propenden está el contar con los espacios designados y la señalización pertinente en los casos de mejoras o construcciones en las vías públicas, además de ser una razonada contraprestación a favor del beneficiario que auxilia o tributa a la institución para alcanzar tal designio.

Así entonces, si es deber del distrito especial de Santiago de Cali y en el caso particular de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, como se indicó en párrafos precedentes, la conservación y mantenimiento de las vías públicas, el acontecimiento generador del perjuicio tuvo una causa exclusiva: simplemente la omisión de la entidad de cumplir con sus tareas. Esto significa, que el primer elemento constitutivo de la falla del servicio, **la existencia del hecho irregular, está expresándose fehacientemente.**

Ha sido abundante la línea jurisprudencial reiterando la obligación indemnizatoria a cargo del Estado por la omisión en el cumplimiento de dicho deber:

El mantenimiento de una vía pública es obligación oficial que consiste en realizar permanentemente sobre ellas todas las obras y trabajos necesarios para que preste satisfactoriamente el servicio a que está destinada. Es deber del estado (municipio, departamento, nación, etc), velar en todo momento por esta misión y su cumplimiento, que no solo es instrumento material para realizar el derecho de tránsito o desplazamiento de un sitio a otro, que la ley garantiza a todas las personas, sino, además, como una compensación razonable y justa para quienes, con el cumplimiento de las cargas tributarias, han adquirido el derecho a un correcto funcionamiento de los servicios públicos. Normalmente el ejercicio del derecho de transitar no tiene por qué implicar riesgos diferentes de los que son inherentes a fallas de la conducta humana, o sea, de lo que pueden concebirse como independientes de la tarea del Estado respecto del instrumento para realizarlo, que son las vías de comunicación colocadas legal o convencionalmente bajo su responsabilidad. Esta supone un empeño constante para mantenerlas en tal estado de buen funcionamiento, que ni la integridad ni la vida de los transeúntes corra peligro alguno derivado de imperfecciones, daños o desperfectos, carencia de medidas cautelares u otro hecho semejante

Después reiteró igualmente el mismo cuerpo colegiado:

Pero si no puede exigir que el Estado únicamente construya vías seguras y elimine peligros potenciales de los transeúntes, si es obligación actual del Estado Colombiano ACTUAR ante los peligros reales a que se encuentren sometidos los residentes en el país. Y debe actuar en primer término evitando que las personas se sometan al peligro, proporcionando soluciones que logren no tener que sortear situaciones peligrosas, vigilando que las personas no pasen por aquellos sitios y en fin asumiendo una actitud positiva ante los hechos reales que pueden hacer perder la vida a los bienes de los asociados. Si como se ha dicho, el Estado posee una especie de poderes administrativos y policivos que le permiten delimitar el campo de la prestación de los

servicios, lógicamente ante verdaderas situaciones de peligro debe utilizar estos poderes, pues no debe olvidar que su primerísima obligación es la de garantizar y proteger la vida y los bienes de sus miembros. En estos casos, si no podrá exonerarse de la obligación contenida en el artículo 16 de la C.N. aduciendo la imposibilidad física de prevenir un daño o de evitarlo.

Ahora bien, obviamente el hecho que se está endilgado a la institución demandada es el único factor que irrogó los perjuicios que se solicitan sean reparados.

La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en la ley, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8 del decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción como un derecho fundamental; y todos ellos se acompañan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos. En efecto se ha dicho:

“Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen las responsabilidades de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.

La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 197022. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.

El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, considera las señales de tránsito así: Señales de reglamentación, o reglamentarias; señales de prevención o preventivas; y señales de información o informativas. Siendo las de prevención o preventivas aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza

de este". Reviste tanta importancia la disposición sobre estos dos tipos de señales (las reglamentarias y las preventivas), que el propio Código Nacional de Tránsito Terrestre, se ocupó de establecer las dimensiones y características que deben tener las mismas"

El mantenimiento de una vía pública es obligación oficial que consiste en realizar permanentemente sobre ellas todas las obras y trabajos necesarios para que preste satisfactoriamente el servicio a que está destinada. Es deber del Estado (municipio, Departamento, Nación, etc.), velar en todo momento por esta misión y su cumplimiento, que no solo es instrumento material para realizar el derecho de tránsito o desplazamiento de un sitio a otro, que la ley garantiza a todas las personas, sino, además, como una compensación razonable y justa para quienes, con el cumplimiento de las cargas tributarias, han adquirido el derecho a un correcto funcionamiento de los servicios públicos. Normalmente el ejercicio del derecho de transitar no tiene por qué implicar riesgos diferentes de los que son inherentes a fallas de la conducta humana, o sea, de lo que pueden concebirse como independientes de la tarea del Estado respecto del instrumento para realizarlo, que son las vías de comunicación colocadas legal o convencionalmente bajo su responsabilidad. Esta supone un empeño constante para mantenerlas en tal estado de buen funcionamiento, que ni la integridad ni la vida de los transeúntes corra peligro alguno derivado de imperfecciones, daños o desperfectos, carencia de medidas cautelares u otro hecho semejante."

Después reiteró igualmente el mismo Cuerpo Colegiado:

Pero si no puede exigir que el Estado únicamente construya vías seguras y elimine peligros potenciales de los transeúntes, si es obligación actual del Estado Colombiano ACTUAR ante los peligros reales a que se encuentren sometidos los residentes en el país. Y debe actuar en primer término evitando que las personas se sometan al peligro, proporcionando soluciones que logren no tener que sortear situaciones peligrosas, vigilando que las personas no pasen por aquellos sitios y en fin asumiendo una actitud positiva ante hechos reales que pueden hacer perder la vida o los bienes de los asociados. Si como se ha dicho, el Estado posee una especie de poderes administrativos y policivos que le permiten delimitar el campo de la prestación de los servicios, lógicamente ante verdaderas situaciones de peligro debe utilizar estos poderes, pues no debe olvidar que su primerísima obligación es la de garantizar y proteger la vida y los bienes de sus miembros. En estos casos, si no podrá exonerarse de la obligación contenida en el artículo 16 de la C.N. aduciendo la imposibilidad física de prevenir un daño o de evitarlo."

Las condiciones están dadas efectivamente por la falta de protección, de seguridad a través de correcta señalización a lamentables acontecimientos, por más precavidos y cautelosos que sean los usuarios, porque tal vez lo que normalmente se acostumbra es desplazar la responsabilidad de la administración pública a la órbita del beneficiario del sector vial, situación a todas luces inexplicable pues no puede trasladarse un deber institucional a sus administrados, recordemos que el Estado es el que debe propender por brindar mejor calidad de vida.

2.2. Daño causado o nexa causal

Planteado que existió un hecho irregular de la autoridad pública, para poder invocar el deber indemnizatorio de la entidad estatal, encontramos asimismo que tal acto anómalo generó un perjuicio, un daño que surge única y exclusivamente del absurdo suceso. Como lo demostramos, el suceso desencadenó los perjuicios irrogados a los

demandantes producto de la lesión del señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** tal como consta en su historial clínico.

1. Imputabilidad y causalidad.

Nuestra jurisprudencia ha decantado a partir de la lectura del artículo 90 constitucional que la responsabilidad patrimonial de una institución pública, deberá tenerse por probado el daño antijurídico y que éste pueda imputarse a la entidad acusada

"La imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. (...) Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacar al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas". En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones". Siendo esto así, la imputación objetiva implica la "atribución", lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de "cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta". (...). Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: "Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro". (...) la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico)"

Podemos definir el nexo causal como la relación que debe existir entre el comportamiento o conducta del agente y el resultado desfavorable producido; esta confrontación causal tiene que hacerse a través de un estudio retrospectivo donde se **tienen en cuenta los sucesos acaecidos que se considera han sido el antecedente de la consecuencia producida**, teniendo siempre presente que en este proceso cada antecedente es un eslabón más de la cadena causal que ha intervenido en la generación del hecho que se investiga, en otros términos lo que se busca es demostrar

la presencia de un vínculo necesario entre un antecedente (causa) y un consiguiente (efecto)

Por consiguiente, para lograr establecer la causa en el evento sub-lite, debemos acudir al antecedente de la institución demandada, es decir la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y reglamentarios. Demostrando de forma contundente que la acción anormal fue la causa eficiente del daño causado al reclamante, en otros términos, evidencia claramente la relación causal entre la irregularidad administrativa y el daño; por lo tanto, al concurrir los componentes del régimen de responsabilidad de la falla o falta del servicio, deberá instarse a la institución pública el deber de resarcir toda lesión a bien jurídico o perjuicio originado a nuestros mandantes.

CONCLUSIÓN

Esto demuestra de forma contundente que el hecho imputado ha sido la causa eficiente del daño causado al reclamante, en otros términos, evidencia claramente la relación causal entre la omisión o irregularidad administrativa y el daño; por lo tanto, al concurrir los componentes del régimen de responsabilidad de la falla o falta del servicio, deberá imponerse a la institución el deber de resarcir toda lesión o perjuicio originado a nuestros mandantes.

DEL MEDIO DE CONTROL A EJERCER

Esta controversia de carácter particular en vía judicial corresponde a una demanda de Reparación Directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.

RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Solicitamos al señor Procurador Judicial delegado ante lo Contencioso Administrativo se tengan como medios de prueba los siguientes documentos aportados con la solicitud de demanda

1. Copia Cédula Luis Gonzaga Marín Pineda
2. Copia de cédula de la señora Clara Ríos Ardila
3. Declaración extrajuicio suscrita por los demandantes a los dos (02) días del mes de agosto del 2022 en la Notaría Quinta de Cali en donde manifiestan que conviven en Unión Marital de Hecho hace aproximadamente veintiséis (26) años

4. Copia historia clínica del señor Luis Gonzaga Marín Pineda
5. Informe valoración Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
6. Formato Único de noticia criminal- Conocimiento Inicial
7. Informe policial de accidente de tránsito No. A001523473 realizado por el Agente de Tránsito Johnny Ledesma Chavarro Placa 248
8. Reporte de iniciación FPJ 01 realizado por el Agente de Tránsito Robel Reinel Rosero
9. Informe ejecutivo FPJ 03 realizado por el funcionario de la secretaria de Transito Grupo PJ Criminalística Johnny Ledesma Chavarro, placa 248
10. Acta de inspección a lugares FPJ 09 Realizado por el funcionario de la secretaria de Transito Grupo PJ Criminalística Johnny Ledesma Chavarro, placa 248
11. Informe FPJ-11, labores investigativas adelantadas por policía Judicial.
12. Inspección al vehículo PFJ 22 realizado por el funcionario de la secretaria de Transito Grupo PJ Criminalística Johnny Ledesma Chavarro, placa 248
13. Material fotográfico obtenido el mismo día de los hechos y el cual aportó nuestro mandante al proceso
14. Material fotográfico obtenido del lugar de los hechos meses después del accidente de tránsito, donde se puede evidenciar la obra terminada que estaba realizando la **Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios**, en el lugar donde ocurrió el siniestro.
15. Respuesta emitida por el doctor Miguel Francisco Prado Gil director técnico de la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios a la petición radicada bajo el No. 202341730101244662 expedida el 08 de agosto del 2023.
16. COMPLEMENTO AL CONTRATO No. 4181.010.26.1.290-2022 por medio del cual la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios suscribe contrato con el CONSORCIO SEPARADOR VERDE 2022 NIT- 901594259-7 para la ejecución de la obra pública.
17. Declaración extra juicio suscrita en la Notaría 5 por la señora Claudia Patricia Gracia Álvarez identificada con cédula de ciudadanía No. 66.858.496
18. Declaración extra juicio suscrita en la Notaría 5 por la señora Martha Cecilia Ríos Vargas identificada con cédula de ciudadanía No. 31.977.729
19. Declaración extra juicio suscrita en la Notaría 5 por el señor José Rubén Castaño Betancur identificado con cédula de ciudadanía No. 10240913
20. Acta de Audiencia Procuraduría 18 Judicial II para asuntos administrativos

21. Constancia de trámite Conciliatorio Extrajudicial Administrativo PROCURADURÍA
18 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

ANEXOS

1. Poder debidamente otorgado

I. MEDIOS DE PRUEBA A PEDIR SEAN DECRETADAS POR EL DESPACHO

TESTIMONIALES

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre las circunstancias en las cuales el señor Marín Pineda se vio afectado en su salud a raíz de accidente de tránsito cuando fue impactado por un bus padrón del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO), perteneciente a la entidad **ETM Empresa de Transporte**, del mismo modo darán fe de la relación de pareja que tienen los demandantes y los perjuicios morales, patrimoniales, a la salud causados a raíz de este siniestro vial.

- ❖ **CLAUDIA PATRICIA GARCÍA ÁLVAREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 66.858.496 Expedida en cali, con dirección de notificación calle 47A No. 3EN-64 Barrio Vipasa Cali- Teléfono 3028322818
- ❖ **JOSE RUBEN CASTAÑO BETANCUR** identificada con cédula de ciudadanía No. 10240913 Expedida en Manizales, con dirección de notificación calle 47A No. 3EN-64 Barrio Vipasa- Cali, teléfono 3117474432
- ❖ **MARTHA CECILIA RIOS VARGAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 31.977.729 expedida en Cali, dirección de notificación Avenida 4 norte No. 47AN-36 Barrio la Flora- teléfono 3168627901

TEMA: Si conocen a los demandantes; el motivo de su conocimiento; cómo se conforma su núcleo familiar; donde Vivían para la fecha de los hechos; como es la relación afectiva en el núcleo familiar; si conocen sobre los hechos donde resultó gravemente lesionado el señor Marín Pineda, ; a qué actividad laboral se dedicaban el señor Marín Pineda para la época de los hechos, cuanto devengaba; cómo influyó el accidente de tránsito en su núcleo familiar; cómo era el estado anímico de los demandantes y su relación con su familiar accidentado; qué dificultades afrontan los demandantes en la actualidad con ocasión al accidente de tránsito ocurrido; cómo es la situación económica actual; y las demás que resulten conducentes y necesarias para el proceso, o las que Su Señoría y las partes que intervengan en la audiencia

estimen pertinentes.

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer al agente de tránsito agente **JOHNNY LEDESMA CHAVARRO** placa 248 adscrito a la secretaría de Tránsito y Transporte y quien funge como la persona que atendió el siniestro mencionado en este libelo demandatorio, adicional fue el servidor encargado de realizar las labores de investigación pertinentes del caso toda vez que hace parte del grupo de policía judicial y criminalística de la secretaría de Tránsito.

TEMA: En primera medida se le preguntará por el croquis elaborado en el accidente de tránsito donde resultó lesionado el señor Marín Pineda, que indique en qué condiciones encontró el lugar de los hechos cuando realizó el primer acercamiento al lugar, que se sirva indicar si se percibía en el sector donde ocurrió el accidente Carrera 44 con avenida 6 norte el desarrollo de alguna obra pública, si la respuesta es afirmativa que describa el lugar de los hechos y que sustente lo mencionado en el informe de policía judicial FPJ 09 acta de inspección a lugar el cual reposa en la el proceso en Fiscalía General de la Nación y que fue adjunto dentro de la relación de medios probatorios, adicional a ello se sirva indicar si tiene conocimiento de la entidad que estaba realizando las obras en el sector, las que usted señor Juez considere necesarias para el proceso y las que surjan en el debate probatorio.

INTERROGATORIO DE PARTE

Atendiendo la posibilidad que permite el artículo 198 de la ley 1564 de 2012 pedimos¹

¹ El artículo 203 de la legislación adjetiva anterior consagró la figura del interrogatorio a instancia de parte, medio de prueba que consistía en que cualquiera de las partes podía pedir la citación de la contraria a efectos de interrogarla sobre hechos relacionados con la litis. Sin embargo, en la ley 1564 de 2012, bajo esta misma figura se permite la citación a instancia de cualquiera de las partes, aún de su mismo apoderado, desapareciendo la restricción en su petición, es decir que únicamente se hacía respecto de la parte contraria. La declaración de la parte, por su manifiesto interés personal en el resultado favorable, históricamente ha estado en el centro de intensas polémicas. Se rechazó su confiabilidad respecto de los hechos que benefician al declarante, especialmente en el revaluado sistema probatorio del proceso esencialmente escrito, donde se limita la eficacia probatoria de la declaración de parte a la confesión y el juramento probatorio, estimatorio o deferido por la ley. No obstante, los modernos sistemas que adoptan la victoriosa oralidad, entre ellos el del CGP, al acrecentar la inmediación y la libre valoración de las pruebas, engrandecen el significado principal del contacto personal e inmediato del juez con las partes y prácticamente sin excepción reconocen el vigor y la eficacia probatoria de la simple declaración de parte, obtenida en un interrogatorio libre que podrá ser ordenado por el juez en cualquier momento con fines aclaratorios o de clarificación, sin perjuicio del interrogatorio formal o de absolución de posiciones que tradicionalmente era el único que se practicaba, a solicitud de los litigantes, con miras a obtener la confesión de la contraparte. CANOSA Suárez, Ulises. "Código General del Proceso. Aspectos Probatorios"

en XXXIII, Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre. Bogotá D.C. – Colombia. Primera Edición - septiembre 2012. En este sentido el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con ponencia de la Dra. Zoranny Castillo en auto interlocutorio 396 del 11 de diciembre de 2018 dentro del proceso radicado bajo el número 7600013333016201700069, Demandante: Andrés Perea Hurtado, Demandado Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, sostuvo: Así entonces, sobre la procedencia del decreto de la prueba el despacho revocará la decisión considerando que, si bien es cierto del enunciado inicial del artículo 184 del CGP transcrito podría inferirse que solo puede citarse a interrogatorio a la contraparte, lo cierto es que de la totalidad del capítulo que regula la práctica, y finalidad de la prueba se infiere que ella no está limitada a tal evento; el hecho de que la confesión en materia contenciosa no esté proscrita, excepto para los representantes legales de las entidades públicas por expresa

respetuosamente al despacho se sirva disponer la citación del señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** identificado con cédula de ciudadanía No. 14.951.794 de Cali Valle (Víctima) y la señora **CLARA RIOS ARDILA** identificada con cédula de ciudadanía No. 31.919.495 de Cali Valle (Esposa de la víctima)

PERICIALES

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 el artículo 212 de la ley 1437 de 2011, solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva ordenar la siguiente pericia, encaminada a demostrar el daño alegado, en especial sobre los supuestos **décimo** acápite HECHOS de este escrito demandatorio

Remitir al señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** identificado con cédula de ciudadanía No. 14.951.794 de Cali a la Junta Regional de Calificación de la Invalidez del Valle del Cauca, ubicado en la calle 5 E No. 42 - 44 - Santiago de Cali; para que le sea practicado un reconocimiento médico y se sirvan determinar a pérdida de capacidad laboral, como consecuencia de las afecciones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas derivadas del evento sufrido a los (03) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022)

OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

Con fundamento en el artículo 164 numeral 2 literal i de la ley 1437 de 2011, nos encontramos dentro del término para instaurar la demanda de Reparación Directa.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 157 de la ley 1437 de 2011, que indica que la cuantía se determinará, tratándose de varias pretensiones; por el valor de la pretensión mayor, nos permitimos estimar razonadamente la cuantía de **Ciento treinta y un millones doscientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos (\$131.295.834) correspondientes al “perjuicio material y moral”** de los demandantes.

La anterior cuantía deberá tomarse en consideración para todos los efectos legales.

disposición del artículo 195 ob. cit., permite colegir que nada impide que la propia parte pida su interrogatorio y asuma sus efectos en caso de que se den los requisitos del artículo 191 ídem para que se tenga como hecho confesado. Lo anterior, aunque parezca ilógico, encuentra fundamentos en que el proceso oral por audiencias en donde se privilegia el principio de inmediación de la prueba, permite con el interrogatorio de parte, en el cual incluso se puede hacer diligencia de reconocimiento de documentos, provocar confesión, etc. que el Juez y la propia contraparte se haga una mejor idea de la teoría de caso de la parte interesada autocitante provoque un ejercicio de contradicción de la prueba de mayor complejidad y por ende un despliegue de mejor manera el derecho a la defensa incluso tiene un efecto psicológico en el debate al poder conocer el sentir y como lo expresa la parte interesada. (Negrilla fuera de texto)

COMPETENCIA

Por haber ocurrido los hechos en jurisdicción del distrito de Santiago de Cali (V), de conformidad con la cuantía establecida, lo es competente el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali, como lo indica el numeral 6 del artículo 156 de la ley 1437 de 2011 y el Acuerdo 3321 de 200633.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En armonía con lo que establece el artículo 255 de la Ley 1437 del 2011 y los artículos 64,65, 66 y 67 se presenta llamamiento en garantía en cuaderno aparte, en donde se solicita llamar en garantía al **CONSORCIO SEPARADOR VERDE 2022** NIT 901594259-7 representado legalmente por la señora Lina Marcela Galindo Giraldo identificada con cédula de ciudadanía No. 1.151.943.407.

NOTIFICACIONES

Los suscritos apoderados

Calle 11 No 5-61 edificio Valher- Cali, oficina 705

Correo electrónico. agtabogadosyassociados@gmail.com, juliar45@hotmail.com

Teléfonos: 3114087461, 3153410963

Los demandantes

LUIS GONZAGA MARIN PINEDA identificada con cédula de ciudadanía No. 14.951.794 de Cali Valle (Víctima), correo electrónico agtabogadosyassociados@gmail.com, dirección la de los suscritos apoderados, teléfono 3163527055

CLARA RIOS ARDILA identificada con cédula de ciudadanía No. 31.919.495 de Cali Valle (Esposa de la víctima), correo electrónico agtabogadosyassociados@gmail.com, dirección la de los suscritos apoderados, teléfono 3163527055

Las entidades demandadas

Distrito Especial de Santiago de Cali, representado por el alcalde, el Doctor Alejandro Eder Garcés o quien haga sus veces, Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte No. 10 – 70 de Cali,

Correo electrónico notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, **representado por el alcalde, el Doctor Alejandro Eder Garcés o quien haga sus veces, Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte No. 10 – 70 de Cali, directora técnica de la unidad, Noralba García Moreno, con correo electrónico** noralba.garcia@cali.gov.co

Correo electrónico: contactenos@cali.gov.co

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Carrera 7 N° 75-66 Centro Empresarial C 75- Bogotá

Teléfono (2558955)

Correo electrónico. Procesos@defensajuridica.gov.co

Comendidamente

JOSÉ JULIÁN ARANGO ESCOBAR

C.C. No.1.116.258.847 de Tuluá

T.P. No. 352.270 del C.S.J

Correo. e. agtabogadosyasociados@gmail.com registrado en el SIRNA

ABOGADO

MARIA JENIFER GIRALDO GIRALDO

C.C. No. 1.007.304.272 de Cali

T.P. No. 407.289 del C.S.J.

Correo. e. agtabogadosyasociados@gmail.com registrado en el SIRNA

ABOGADA



Santiago de Cali, diciembre del 2023

Señores

**JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO – Reparto-
Ciudad**

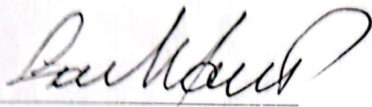
LUIS GONZAGA MARIN PINEDA Y CLARA RIOS ARDILA, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, manifestamos por el presente documento que conferimos PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE al Doctor **JOSÉ JULIÁN ARANGO ESCOBAR**, titular de la cédula de ciudadanía No. 1.116.258.847 de Tuluá, con Tarjeta Profesional de Abogado No.352270 proveída por el Consejo Superior de la Judicatura y la Doctora **MARIA JENIFER GIRALDO GIRALDO** titular de la cédula de ciudadanía No. 1.007.304.272 de Cali, con Tarjeta Profesional de Abogado No. 407.289 proveída por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en nuestro nombre y representación inicie y adelante ante esa jurisdicción demanda de Reparación Directa en contra del **MUNICIPIO DE CALI, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**; a fin de obtener un acuerdo respecto de la indemnización que corresponda como consecuencia de las perturbaciones psicológicas y económicas sufridas por el señor **LUIS GONZAGA MARIN PINEDA** a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022) cuando se movilizaba en calidad de peatón a la altura de la carrera 44 con calle 6 norte de Cali, en la cual la Unidad Administrativa Especial De Gestión de Bienes y Servicios se encontraba desarrollando un contrato de obra pública de mantenimiento y adecuación del paisajismo y obras complementarias de las zonas verdes, pero no contaba con la señalización y la delimitación en la construcción, además estaban interviniendo el paso peatonal, lo que generó que el señor Luis Gonzaga atravesara el sector en construcción y fuese arrollado por un padrón del masivo de placa VCQ874, de marca MERCEDES, conducido por el señor LUIS ALFREDO DAGUA SEVILLA, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 80.413.339.

Nuestros apoderados quedan ampliamente facultados para recibir, cobrar, conciliar, desistir, sustituir, reasumir, interponer recursos de ley, presentar pruebas y en general todas las facultades que la ley otorga.

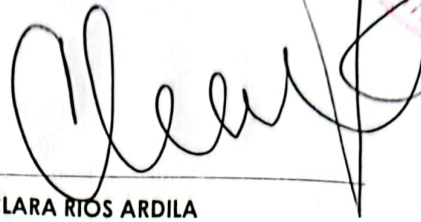
Sírvase reconocer su personería.

Atentamente,

AGT Abogados & Asociados
Calle 11 # 5 – 61 Edificio Vallier, Oficina 705 Cali
PBX 311 408 74 61



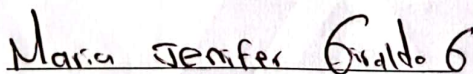
LUIS GONZAGA MARIN PINEDA
C.C. 14.951.794 de Cali
PODERDANTES



CLARA RIOS ARDILA
C.C. 31.919.495 de Cali


JOSÉ JULIÁN ARANGO ESCOBAR

C.C. No. 1.116.258.847 de Tuluá
T.P. No. 352.270 del C.S.J
Correo: jular45@hotmail.com
ABOGADO


MARIA JENIFER GIRALDO GIRALDO

C.C. No. 1.007.304.272 de Cali
T.P. No. 407.289 del C.S.J
Correo: agtabogadosyassociados@gmail.com
ABOGADA

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO
Identificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
Cali, 2024-02-12 15:09:17
Ante GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI compareció:
MARIN PINEDA LUIS GONZAGA
Identificado con C.C. 14951794
Quien declaró que las firmas de este documento son suyas, el contenido del mismo es cierto y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. Código mbjt

X 
Firma compareciente

notaria **5** 177-082c5163



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO
Identificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
Cali, 2024-02-12 14:53:27
Ante GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI compareció:
RIOS ARDILA CLARA
Identificado con C.C. 31919495
Quien declaró que las firmas de este documento son suyas, el contenido del mismo es cierto y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. Código mbk82

X 
Firma compareciente

notaria **5** 177-64ed75ff



AGT Abogados & Asociados
Calle 11 # 5 - 61 Edificio Valher, Oficina 705 Cali
PBX 311 408 74 61